

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guaymas, por el C. Domingo Cañez, contra la exacción del derecho de tres por ciento de consumo que se le cobra por calorce tercios de manta procedentes del Estado de Sinaloa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que siendo idéntico el presente juicio de amparo promovido por el C. Domingo Cañez contra la exacción del derecho de tres por ciento de consumo sobre catorce tercios Manta procedentes del Estado de Sinaloa, el que promovieron los Sres. Loiza y Bustamante en Enero del presente año, no puede menos que rectificar la opinion que en aquel se dió, sin que obste los nuevos argumentos que en este se expresan, los que no convenceen para destruir los fundamentos en que se ha apoyado ese Juzgado para negar aquel amparo de conformidad con ese mi pedido, y confirmado por la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, no hago mas que insertar á la letra lo que en aquel expuse, que es como sigue:

La Legislatura del Estado, al dar la ley de 3 de Diciembre de 1868, sobre clasificacion de Rentas, lo ha hecho conforme á sus facultades, supuesto que la Constitucion general de 1857 en su artículo 117, dice: que las facultades que no estén expresamente concedidas á los funcionarios federales se tienen reservadas á los Estados, pudiendo estos, en consecuencia, legislar en todo aquello en que no se opongan y se expresan en las fracciones 1ª, 2ª y 3ª del artículo 111, como de las mismas tres fracciones del artículo 112. Por lo mismo, es inconcuso el derecho que tienen los Estados de imponer y arreglar sus impuestos para el mejor régi-

men de su Gobierno. Sentado este principio, véamos si al darse la referida ley de clasificacion se opone en algo su artículo 3º y 4º á la ley general de 2 de Mayo del mismo año que previene, que ningun Estado puede cobrar ó imponer bajo ninguna denominacion á los frutos de otro Estado mayores contribuciones que las que exige á sus propios frutos. No hay duda que en lugar de oponerse á dicha disposicion, se ha cumplido con ella, y para convencerse no hay mas que leer con atencion los referidos artículos 3º y 4º por los que el último impone á los géneros, frutos y efectos que se extraigan del Estado, un tres por ciento sobre su aforo: la misma cuota, y bajo los mismos términos impone en su artículo anterior á los géneros, frutos y efectos nacionales que se introduzcan al Estado. Por lo mismo, hay una completa igualdad y reciprocidad que es la que ha querido la ley, y en consecuencia, no veo que tenga justicia el quejoso para pedir tal amparo, fundándose en la fraccion 3ª del artículo 101 de la referida Constitucion general, porque esta no se ha infringido como lo he demostrado, no invadiendo de ninguna manera los actos de las autoridades de este Estado á la autoridad federal, y antes bien, la Legislatura del Estado al dar la ley de 3 de Diciembre de 1868, lo ha hecho conforme á sus atribuciones, gravando con cuotas iguales á los efectos Nacionales, ya sea que se introduzcan ó se extraigan del Estado, y por lo mismo repito, que con la expresada ley del Estado, no oponiéndose á las leyes federales, de ninguna manera se han violado las garantías del que ha promovido este juicio de amparo.

Por lo que: á V. pido, en virtud de los fundamentos y razones que se han expuesto y que se pueden ver mas desarrollados en el dictámen que dió la Comision de Hacienda al discutirse la referida ley, y que está publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 11 de Diciembre de 1868, se sirva decretar, no haber lugar al amparo que se solicita; al hacerse así, creo que se obrará en justicia y conforme á la ley.

Guaymas de Zaragoza, Diciembre nuevo de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Lic. José Monteverde.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Guaymas de Zaragoza, Enero cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Domingo Cañez, contra la exaccion del derecho de tres por ciento, que el C. Administrador de Rentas de este Puerto pretende hacerlo en virtud del decreto del Estado de 8 de Diciembre de 1868, sobre 14 tercios de manta que introdujo á la plaza con pase de la Aduana terrestre de Mazatlan, fundando su queja en el artículo 1º fraccion 3ª de la ley Orgánica de 20 de Enero de 1869, por considerar el citado decreto en lo relativo, una invasion del poder federal por parte del Estado; el informe del expresado Administrador, sosteniendo que ha obrado dentro de la órbita de sus atribuciones; el pedimento fiscal, desfavorable al quejoso, y cuanto mas consta de autos y considerando: Que los Estados, como soberanos, en su régimen interior, son libres para decretar los impuestos necesarios á cubrir los gastos de su administracion, con tal que no falten al pacto fundamental que los une, ya violando las garantías del individuo ó bien invadiendo la esfera de los poderes supremos: Que en el caso, no se ha alegado por el actor, ni cometido por las autoridades del Estado violacion alguna de las garantías individuales. Que tampoco existe la invasion de poder que se alega, porque la única limitacion que los Estados tienen sobre el comercio interior, es la que les impuso la ley general que se invoca de 2 de Mayo de 1858, dictada en uso de la facultad que reservó al Congreso de la Union el artículo 72 de la Constitucion de la República en su fraccion 9ª Que el impuesto reclamado no es contrario al citado artículo constitucional ni por consiguiente á la ley

que lo reglamentó, y cuyo espíritu no puede ser otro que el muy manifiesto del mismo artículo, pues que él (el impuesto) pesa igualmente sobre los productos de este Estado que sobre los de los otros de la federacion, al hacerse el comercio entre ellos, sin que pueda sostenerse que la disposicion que lo estableció ofrece mayores dificultades al Estado de Sinaloa, por ejemplo, para expendir sus producciones en Sonora, que á Sonora para expendir las suyas en Sinaloa. Que dar otra interpretacion á la ley de 2 de Mayo de 1868 y querer que su aplicacion se extienda hasta el comercio local, por decirlo así, de cada Estado en su propio territorio, seria violentar el sentido literal de la fraccion reglamentada por ella, la cual se refiere exclusivamente al comercio de los Estados entre sí, y consentir en la restriccion y mengua de la soberanía de éstos. Que estando resuelto en sentido negativo por este Juzgado, el amparo que en caso idéntico pidió el ciudadano Loiza, de cuya casa de comercio es socio ó dependiente principal el ciudadano Domingo Cañez, y confirmado el fallo por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, no puede haber buena fé ó ignorancia en la interposicion de este nuevo juicio, en el cual el actor (fojas 1ª vuelta) ha intentado destruir los fundamentos de aquel fallo, suponiendo que tales razonamientos no han podido hacerse en conciencia. Por lo expuesto y con fundamento de los artículos 101 de la Constitucion federal, y 13, 16 y 27 de la citada ley Orgánica de 20 de Enero de 1869, fallo:

1º La Justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Domingo Cañez contra la exaccion del derecho de 3 por ciento que le exige el ciudadano administrador de rentas de este Puerto, sobre los 14 tercios de manta del país que introdujo á esta plaza con pase de la aduana terrestre de Mazatlan:

2º Se impone al expresado Cañez una multa de cien pesos por la interposicion del presente recurso.

Notifíquese, publíquese por los periódicos del Estado, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para la revision de este fallo. El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—(Firmados.)—*D. Elias.*—*A., P. del Rincon.*—*A., Tomás Montoya.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Sonora por el ciudadano Domingo Cañez, contra la exaccion del derecho de tres por ciento que el ciudadano Administrador del puerto de Guaymas pretende hacer en virtud del decreto del Estado de 3 de Diciembre de 1868, por 14 tercios de manta que introdujo con pase de la aduana terrestre de Mazatlan, y considerando: que el decreto referido no establece restricciones onerosas al comercio de Estado á Estado, y que por lo mismo no es contrario á la ley general de 2 de Mayo de 1868, ni á la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion federal.

Se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada el 4 de Enero último por el Juzgado de Distrito de Sonora que declara:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Domingo Cañez, contra la exaccion del decreto de 3 por ciento que le exige el Administrador de rentas del puerto de Guaymas, sobre los 14 tercios de manta del país que introdujo con pase de la Aduana terrestre de Mazatlan; y

2º Que se impone al expresado Cañez una multa de cien pesos, por la interposicion del presente recurso.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito de Sonora, con copia certificada

de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arleaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por D. Juan Pebelie, contra el embargo de unos muebles, que dice le pertenecen, decretado por el Juzgado de primera instancia, por de la propiedad de D. Enrique Wensell, en el juicio ejecutivo seguido contra éste por D. Fernando Ortiz.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Gerónimo V. Sandoval, oficial 1º de la Gefatura de Hacienda del Estado, encargado por ministerio de la ley de la misma oficina, en funciones de Promotor fiscal, por haberse excusado el propietario alegando las causas que le asisten para no conocer como tal funcionario en el juicio de amparo promovido por D. Juan Pebelie, y sin investigar si procede en justicia la inhibicion del referido ciudadano Promotor Fiscal, en con-